

Propuestas como impuestos a los dividendos, la renta de personas naturales y jurídicas, impuesto al patrimonio, y el IVA a algunos productos que no hacen parte de la canasta básica familiar, serán algunas alternativas que se discutirán en los próximos días en el Congreso.

BOGOTÁ COLPRENSA

La papa, el huevo, los viveres y demás componentes de la canasta familiar quedaron libres del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esa noticia, que le da un respiro a la gran mayoría de los colombianos, deja intranquilo al Gobierno, que tendrá que buscar ahora alternativas para financiar un déficit fiscal que para el 2019 asciende a los 14 billones de pesos.

De estos 14 billones de pesos, el Gobierno esperaba recoger 11 billones con el gravamen a los productos de consumo básico. A falta de estos recursos, la disyuntiva es recortar gastos, en especial los relacionados con temas sociales, o conseguir otros ingresos para financiarlos. ¿Qué tan viable es cada una de estas alternativas?

El senador de Cambio Radical Richard Aguilar, al anunciar el retiro de la propuesta de IVA para la canasta familiar, indicó que se conformará una subcomisión para evaluar cuál será el recaudo que se podría conseguir con la reforma el próximo año.

"Estamos revisando las proposiciones en donde hay varias opciones con un recaudo que podría llegar hasta los 8 y 9 billones de pesos, pero considero que podemos llegar a los 10 billones, porque presentamos un principio de favorabilidad en donde si la DIAN flexibiliza sus sanciones podría representar un recaudo adicional a los 3 y 4 billones de pesos", aseguró Aguilar.

¿Y AHORA?

Según las cuentas del senador, estas alternativas permitirían que el déficit ya no sería de 14 billones, sino mucho menor, pero aún así, las opciones no son suficientes para llenar el

Sin IVA a la canasta familiar, ¿cómo tatará el Gobierno el hueco fiscal de \$ 14 billones?



EL GOBIERNO ESPERABA recoger 11 billones con el gravamen a los productos de consumo básico. A falta de estos recursos, la disyuntiva es recortar gastos, en especial los relacionados con temas sociales, o conseguir otros ingresos para financiarlos. ¿Qué tan viable es cada una de estas alternativas?

faltante del presupuesto. El tiempo corre y se agota el tiempo para encontrar alternativas.

Para el decano de economía de la Universidad Central, Erick Behar Villegas, los ponentes de la Ley de Financiamiento tendrán que comenzar a examinar de dónde provendrán buena parte de los recursos que se requieren para financiar el presupuesto del próximo año. "Aunque el objetivo será encontrar fuentes alternativas para obtener los 14 billones de pesos que requiere el gobierno, los congresistas son conscientes que esta cifra podría ser difícil de conseguir, y en ese caso, el gobierno tendrá que hacer algunos recortes al presupuesto", manifestó Behar Villegas.

El analista económico detalló que el Gobierno Nacional ha sido claro en su decisión de que si no se recaudan los 14 billones, lo primero que será recortado es el gasto social. Es decir, adiós a la inversión de algunos subsidios como Familias en Acción, a los de energía y gas, vías terciarias, deporte e investigación y más allá de esto, la inversión para el funcionamiento del Acuerdo de Paz. Aparte de este panorama, otros sectores que se podrían ver afectados son educación, a pesar de que en estos momentos el Gobierno enfrenta una cara a cara con los estudiantes universitarios que piden más financiación, Defensa y Vivienda.

"El Gobierno tiene dos salidas. Una es quitar

subsidios o la otra es recortar a las carteras, algo que también será un golpe. Debo resaltar que tanta flexibilidad por parte del Congreso de la República con un Presupuesto Nacional desfinanciado ha traído que no se esté analizando a fondo la solución", agregó el decano de economía de la Universidad Externado.

Este panorama avista que los 14 billones no podrían ser logrados quedándose el recaudo entre unos 6 y 9 billones de pesos, y sobre la cifra restante la baraja de posibilidades del Gobierno se resumiría a aplazar o recortar el presupuesto del próximo año.

LAS SALIDAS

En medio de las discusiones sobre la ley de financiamiento y teniendo en cuenta que uno de los puntos centrales era recaudar 11,3 billones a través de la extensión del IVA a la canasta familiar, han salido varias propuestas para compensar y conseguir los recursos que se tenían contemplado recaudar a través de ese impuesto.

El experto en economía Julián Arévalo manifestó que la caída del proyecto al gravamen de la canasta familiar le movió "el suelo" al Gobierno Nacional, que no tenía un plan B o C y ahora debe recurrir a una "colcha de retazos".

"El escenario que tenemos en este momento es de gran incertidumbre, lo que se ha dicho públicamente es que no hay un plan B o C para compensar lo que se pensaba recaudar vía extensión del IVA a la canasta familiar. Eso se cruza con una dificultad que es entender exactamente de cuánto es el faltante del presupuesto. Porque hace dos meses el ministro Carrasquilla hablaba de 25 billones, hace unas semanas cuando se empezó a considerar la idea del IVA a la canasta familiar se hablaba de 14 billones en el faltante, de los cuales 11 billones se pensaban recaudar con esto y ahora se está hablando de probablemente 9 billones. Entonces, esa falta de certeza deja volando todo", manifestó Arévalo.

"Hemos avanzado en unas proposiciones como dejar la tarifa del 19 % lo que nos representa 2,5 billones de pesos para 2019. En impuesto de renta para las personas naturales tendríamos 3,3 billones; con las remesas y dividendos 820.000 millones de pesos; con la normalización de activos omitidos o de pasivos inexistentes representan 2 billones de pesos, con todo esto podríamos llegar casi a los 9 billones de pesos", explicó el senador Aguilar.

EN IMPLEMENTACIÓN DE LA PAZ

Disidencias y trabas oficiales, los lunares 'negros': expertos

BOGOTÁ COLPRENSA

A pocos días de que se cumplan dos años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC, pese a que desde distintos sectores se reconocen avances en aspectos importantes, temas como la reincorporación a mediano y largo plazo, garantías jurídicas, seguridad de los excombatientes, cultivos ilícitos siguen preocupando y falta de desarrollos de proyectos productivos, mantienen la preocupación de las organizaciones. En algunos de estos temas estuvieron los principales reclamos que se le hicieron al Gobierno Nacional en un debate de control político realizado este miércoles en el Congreso con las representantes Juanita Gobertus y Catalina Ortiz de la Alianza Verde como citantes. En el debate se recordó que, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, hoy hay 29 estructuras de disidencias en 18 departamentos y 120 municipios, y al menos 1.749 personas en armas, lo que ha llevado al incremento del 21 % en desplazamiento, unas 7.126 personas, además del aumento de agresiones a líderes sociales. Por esta razón se cuestionó la falta de medidas efectivas por parte del Gobierno del

presidente de la República, Iván Duque Márquez, para enfrentar esta problemática. Raúl Rosende, jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, asegura que pese a que el 90% de la reincorporación a corto plazo ha sido efectiva, el organismo que representa mantiene la preocupación sobre la seguridad de los excombatientes debido a que han sido asesinadas más de 80 de ellos en diferentes circunstancias.

"El gran desafío que tenemos es evitar que este fenómeno crezca y se reproduzca. Uno de los aspectos claves es aumentar la presencia del Estado en zonas de conflicto. Creo que no es un secreto para nadie que en muchos territorios de conflicto la presencia del Estado es muy baja o nula", destaca Rosende.

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU resalta el tránsito político de las FARC como uno de los grandes avances del proceso, argumentando que es una de las partes más difíciles de conseguir de manera inmediata en este tipo de procesos. También destaca la dejación de armas como un aspecto relevante, teniendo en cuenta que fue una de las

mayores, en cuanto a cantidad de armas entregadas, que se ha hecho en el mundo.

Sin embargo, señala que la ONU espera que el Gobierno mantenga los acuerdos que se hicieron alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por ser un eje fundamental del posconflicto. Aseguró que esta instancia tiene elementos dignos de ser replicados en otros procesos por las alternativas que propone de construcción de paz.

Andrés Macías, docente investigador de temas relacionados con paz en la Universidad Externado, indica que uno de los "lunares" de la implementación del acuerdo de paz con las FARC son las disidencias, pese a que estas son comunes en este tipo de arreglos. Argumenta el académico que el efecto de este fenómeno ha sido notorio porque sumado a la presencia de otros grupos armados ilegales con el narcotráfico de por medio, ha generado la dinamización de violencia en muchos territorios.

Laura Villa, delegada del Consejo Nacional de Reincorporación de las FARC, coincide con Macías en el sentido de que el conflicto armado continúa en ciertas regiones del país por la falta de presencia institucio-



RAÚL ROSENDE, jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, asegura que pese a que el 90% de la reincorporación a corto plazo ha sido efectiva, el organismo que representa mantiene la preocupación sobre la seguridad de los excombatientes

nal. En cuanto a la seguridad de los excombatientes, Villa agrega que le parece estrecha la visión de seguridad física que tiene el Gobierno porque se limita a unos esquemas de seguridad.

"Si uno se pone a hacer el análisis, muchos de esos esquemas en el área del Catatumbo, Arauca y Norte de Santander, han sido desarmados por los mismos grupos armados", indica la delegada de las FARC y añade que la muerte de los más de 80 exguerrilleros y de más de 300 líderes sociales es una muestra de que se debe ir más allá de unos esquemas de seguridad.

FINALIZA PLEITO JURÍDICO

Corte Suprema le da la razón a exrector universitario que había sido condenado a 8 años

Después de más de 12 años la Corte Suprema de Justicia resolvió el pleito judicial contra el exrector de la Universidad del Atlántico, Ubaldo Meza Ricardo, y que fue promovido por quien en ese momento figuraba como Ministro de Hacienda del Presidente Uribe y que hoy repite funciones como "superministro" del Gobierno actual, Alberto Carrasquilla Barrera.

"Debo expresar públicamente mi complacencia como persona de honor al servicio de la sociedad, por la decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que en sentencia de su Sala Penal de Casación del 26 de septiembre de 2018 y publicada la semana pasada, dejó sin efectos jurídicos la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla, que nunca quedó en firme, en donde me condenaba a ocho años de prisión y al pago de una suma de dinero cercana a los \$7.400 millones", recaló el exrector.

Destaca además Ubaldo Meza que la Corte lo absolvió de todos los cargos formulados por un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción de Bogotá, quien le imputaba los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, por el reconocimiento de pensiones a docentes y servidores de la Universidad del Atlántico, ya que nunca hubo conflicto de intereses.

"Hoy, cuando la verdad sobre el tema pensional de la Universidad del Atlántico sale a relucir y resplandece por fin en su máximo órgano representativo la misión democrática de la justicia, debo decir a mi familia, a mis amigos, a la comunidad universitaria, a la opinión pública en general, y también a mis detractores, que no sólo se reivindicó la dignidad mi buen nombre, sino que me conforta aún más la certidumbre económica que mi absolución representa para las finanzas de nuestra amada Universidad del Atlántico", indicó. Meza explica que el efecto inmediato de la condena penal perseguida por el Ministerio de Hacienda implicaba un recorte drástico



UBALDO MEZA RICARDO, ex Rector Universidad del Atlántico.

en las transferencias de los recursos a cargo de la Nación, un incumplimiento de la ley urdido desde las altas esferas del Estado, según él "desde todo punto de vista irresponsable, arbitrario y unilateral, que conducía a una crisis financiera de la universidad, que alcancé a visionar en mi época de Rector (1998 a 2001), y que llevó a la Institución a la quiebra y a la aplicación de la ley 550". Fue categórico al manifestar que se opuso de manera vehemente a la firma del Leonino Convenio de Concurrencia así como cumplir las órdenes que le impartía la mencionada cartera ministerial, aunque reconoce que lamentablemente más adelante fueron consumadas por quien le sucedió en la Rectoría, un desconocedor de la realidad de la Universidad Pública. "Con el fallo absolutorio proferido por el Honorable Corte Suprema de Justicia, la Corte cierra el capítulo de infamias, desinformación, persecución y mentiras, orquestado por detractores políticos al interior y fuera de la Universidad en mi contra y que estuvieron precedidos por otros fallos en los cuales ya había sido exonerado de toda responsabilidad en denuncias infundadas como el caso de las Conciliaciones, Bonos Pensionales y otros que quedaron suficientemente esclarecidos y donde la justicia me dio totalmente la razón", recaló Meza.

DICE EL BANCO DE LA REPÚBLICA

'La economía redujo el potencial de crecimiento'

BOGOTÁ COLPRENSA

En el marco del seminario 'Desafíos Estructurales de la Nueva Administración Iván Duque 2018-2022', el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, manifestó que el crecimiento potencial actual de la economía colombiana se encuentra en alrededor de 3,3% después de haber estado en niveles de 4% y 4,5%.

Si bien la economía local inició este año un proceso de recuperación e, incluso, en el tercer trimestre de 2018 anotó una cifra de 2,7%, el año pasado el PIB solo creció 1,8%, un dato que no se veía desde 2009. Sin embargo,

desde 2010 a 2015, la locomotora colombiana había crecido todos los años por encima de ese 4%. En 2011 llegó a 6,6%.

El gerente del Emisor también mencionó las últimas buenas noticias que han tenido en materia de inflación y declaró que todavía existen riesgos en los precios de los bienes no transables y que están preocupados por los regulados. "La inflación ha mostrado señales de desaceleración, aunque no así el segmento de regulados, donde los precios energéticos han venido al alza", advirtió Echavarría en el evento organizado por la Asociación Nacional de Ins-



JUAN JOSÉ ECHAVARRÍA, Gerente del Banco de la República.

tuciones Financieras (Anif) y Fedesarrollo. Igualmente, el gerente advirtió de los posibles choques externos que pueda tener una posible alza del IVA contemplado en el proyecto de ley de financiamiento pero mostró cierta calma. "La tasa de política es hoy ligeramente expansionista, los mercados esperan incrementos en 2019", indicó.

Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, manifestó que será necesario anclar la discusión de la reforma en el cumplimiento de la regla fiscal, consolidando la confianza y credibilidad de las finanzas públicas.